



MAGISTRADA: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA

***"Al servicio de la justicia
y de la paz social"***

A - 95

Procedimiento: Ejecutivo

Demandante: Grupo Factoring de Occidente S.A

Demandados: IvanAgro S.A.

Radicado Único Nacional: 05001 31 03 019 2020 00118 03

Procedencia: Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín

Asunto: resuelve recurso de reposición

Medellín, cuatro (4) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

CUESTIÓN

Procede la suscrita Magistrada a resolver el recurso de reposición presentado por la parte demandante en contra del auto fechado el 17 de agosto de 2021, mediante el cual se decretó la suspensión del proceso por prejudicialidad.

ANTECEDENTES

Dentro del presente proceso ejecutivo presentado por Grupo Factoring de Occidente S.A en contra de IvanAgro S.A, mediante el auto recurrido se decretó la suspensión del proceso por prejudicialidad, atendiendo a que, según acreditó la parte demandante,

"actualmente se adelanta una investigación penal en la Fiscalía General de la Nación (Fiscal 70 Seccional de la Unidad de Delitos Contra el patrimonio Económico, la Fe Pública y otros, Unidad Seccional de Fiscalías de Medellín) bajo el SPOA 05-00-16000-248-2020-01552, por los delitos de Falsificación en Documento Privado, Concierto para Delinquir, Estafa y Enriquecimiento Ilícito, por la emisión de

las facturas cambiarias de compraventa que cimientan este proceso y otros de la misma índole. Así las cosas, la decisión que se llegue a adoptar en el mencionado proceso penal influye necesariamente en la sentencia que resolverá en segunda instancia y de manera definitiva este litigio."

EL RECURSO

Mediante escrito radicado vía correo electrónico el 26 de agosto de este año la parte demandante radicó el recurso de reposición que aquí se resuelve, argumentando que

- "1. El demandado contó con mecanismos procesales adecuados para acreditar la presunta falsedad dentro del proceso ejecutivo (ejm. La tacha de falsedad), mecanismos que no interpuso en su oportunidad.*
- 2. El juez de la primera instancia ahondó en la presunta falsedad de los títulos, evidenciando que no estaba demostrada, que la aceptación de las facturas por parte de Ivanagro fue conocida por varias personas de esa empresa y que fue evidente la falta de controles mínimos de parte de la sociedad Ivanagro.*
- 3. Es reiterada y reciente la jurisprudencia que indica que, en caso de presunto fraude en la expedición de los títulos, no se afecta la eficacia cambiaria y debe protegerse al tercero, tenedor legítimo de buena fe exenta de culpa.*
- 4. No se cumplen los requisitos para decretar la suspensión del proceso por prejudicialidad."*

Así las cosas, a juicio de la recurrente, la decisión objeto del recurso pasa por alto que el demandado contó con los mecanismos procesales para probar al interior del proceso la *"falsedad de las facturas, en tanto se alegaba que estas supuestamente no fueron aceptadas por Ivanagro"*, muy a pesar de lo cual dejó pasar la oportunidad y por ende no procedía la suspensión ante la ausencia de defensa en ese sentido. Para fundamentar ese argumento, citó algunas sentencias proferidas por otros Tribunales Superiores de Distrito.

Además, indicó que en la etapa probatoria había quedado acreditado que las facturas base de ejecución pasaron por diferentes áreas de la sociedad demandada, puesto que algunos testigos manifestaron que simplemente se hacían los pagos sin preguntarse “para qué”. Luego:

"(S)e acreditó en la etapa probatoria y analizó por el fallador de primera instancia, que toda el área contable compuesta por 3 personas (Oscar Aguirre, Eddy Wilmar Valencia y Omaira Gómez Pérez), conoció de las facturas, los desembolsos realizados con la sociedad Gextión y de que esta prestaba servicios a la demandada. Así mismo de que los correos remitidos por GFO, fueron observados por toda el área contable (ello sucede con el correo coordinadorcontable@ivanagro.com), y por tanto, toda el área contable pudo observar la el endoso, aceptación, solicitud y promesa de pago de las facturas cuyo cobro hoy se pretende."

Por otro lado, sostuvo que el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio protege a los tenedores de buena fe exenta de culpa, puesto que adquieren *"un derecho autónomo y desligado del que le precede, de tan acentuada estima que suele equipararse al de propiedad sobre el título, amén que en cuanto poseedor conforme a la ley de circulación del título, se encuentra legitimado para ejercer el derecho en él incorporado"*¹

Finalmente, alegó que no se cumplían los requisitos para decretar la suspensión del proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del C.G.P, en tanto que la sentencia que aquí debe dictarse no depende de otra decisión judicial y la “cuestión” que motivó la suspensión tampoco era de imposible solución toda vez que podía y debía alegarse por vía de excepción.

RÉPLICA

Dentro del término de traslado la parte demandada no allegó pronunciamiento alguno, muy a pesar de que la recurrente cumplió con la carga consagrada en el el párrafo del artículo 9º del decreto 806 de 2020.

CONSIDERACIONES PARA EL CASO CONCRETO

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de junio de 2000, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Además, Devis Echandía, Hernando, Compendio de Derecho Procesal

Lo primero que debe aclararse es que en realidad el recurso fue formulado con una estructura juiciosa y clara, misma razón por la cual de entrada se advierte que los argumentos enlistados en sus numerales 1, 2, 3 y 4 francamente están más bien orientados a que se confirme la sentencia que puso fin a la primera instancia, en la medida que lo alegado en ellos pasa por una supuesta inexistencia de "falsedad" de las facturas base de la ejecución, la posibilidad que tenía la demandada de probar cualquier irregularidad con ocasión de esos títulos valores por vía de excepción y, en fin, temas vinculados con el fondo del asunto más que con la suspensión del proceso por prejudicialidad.

Es que debe recordarse que la prejudicialidad *"se presenta cuando se trata de una cuestión sustancial, diferente pero conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre la que es materia del litigio (...)"*². Luego, el de la prejudicialidad es un asunto que se relaciona con el principio de "unidad de jurisdicción", que no con la solución dogmática que un litigio deba tener de fondo en uno u otro sentido, pues incluso la Corte Constitucional en sentencia de unificación en materia de prejudicialidad penal explicó con ejemplificativo razonamiento, en un caso a grandes rasgos similar al presente, que

"(U)n antiguo juez de instrucción criminal, el Juez del Circuito Penal y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por un lado, y el Juez 29 Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal de Santafé de Bogotá, por otro lado, integran todos ellos la jurisdicción ordinaria, luego atenta contra el principio de unidad de jurisdicción que los jueces penales ordenen preventivamente no pagar unos títulos que fueron sustraídos, que luego en la decisión que resuelve la causa ordenen al Banco de la República que le pague esos títulos al IFI; y, contraviniendo la orden inicial de no pago, los jueces civiles le ordenen al mismo Banco que con base en los mismos títulos se le pague a Bermúdez y Valenzuela S.A.; es decir, ocurriendo determinaciones encontradas en perjuicio del Banco de la República que fácilmente se hubieren evitado si el proceso civil se hubiere suspendido.

² Corte Constitucional de la República de Colombia. Sentencia de Tutela T-513 de 1993. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

*Si no puede haber órdenes diferentes por lo mismo y si habiéndolas se altera el orden justo porque el Banco de la República terminaría pagando doblemente lo debido, en razón de las discímiles decisiones judiciales, es necesario dilucidar, en el caso concreto, cual providencia judicial es tan arbitraria que llegue a constituir una via de hecho” (sic texto original)*³

De modo que el decreto de prejudicialidad responde es a la prudencia que debe reinar cuando el Juez Civil se entera sobre el curso de otras causas judiciales, incluidas las penales, que pueden afectar su decisión, máxime cuando en este caso IvanAgro no ha alegado precisamente que la ejecución se basa en “títulos falsos”, ni más faltaba. Por el contrario, en lo que ha insistido la ejecutada es en que el proceso de creación (emisión), aceptación y posterior endoso de las facturas fue -aunque para la Suscrita es claro que eso lo determinará la autoridad penal competente-, producto de un ilícito, pues según afirma no existió la prestación del servicio a que tales facturas se refieren.

Luego, visto que el artículo 772 del Código de Comercio preceptúa en lo pertinente que *“(N)o podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito”*, resulta pertinente recordar que la Fiscalía 70 Seccional de Medellín lo que certificó fue la existencia de una investigación penal en contra del señor Oscar Alberto Aguirre, con ocasión de los supuestos delitos de falsedad en documento privado **en concurso con estafas** por un monto superior a los \$17.000.000.000.

Es más, y esto refuerza la procedencia de la suspensión del presente proceso, esa misma autoridad informó que su investigación reviste para este caso una importancia especial porque

“como la modalidad de estafa y falsedad utilizada, fue usando el nombre de la empresa IVANAGRO con ventas de facturas presumiblemente falsas, por la modalidad de factoring a terceras personas o empresas, se han generado múltiples víctimas, igualmente se han emitido órdenes

³ Corte Constitucional. *Sentencia de Unificación SU 478 de 1997*. M.P. Alejandro Martínez Caballero

de policía judicial, se ha recaudado gran cantidad de información, tenemos pendiente recaudar más documentos y soportes para posteriormente realizar los estudios financieros y conocer así los autores”(oficio 20440-01-02-070 Fiscalía)

Entonces, en casos como este resulta imposible cerrar los ojos ante realidades que obligan, mínimamente, a actuar con prudencia a la espera de que la autoridad penal juzgue posibles hechos que a la postre influirán de forma directa en la decisión que aquí se tome, puesto que no existe discusión en cuanto a que el delito no puede ser fuente de derechos, lo que reiteradamente ha sostenido la Corte Constitucional.

Por demás, no es de la ausencia de negocio subyacente de lo que habla el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, pues la norma se refiere al planteamiento de las excepciones derivadas del negocio subyacente o causal, más no a su inexistencia.

Finalmente, en el caso se cumplen los requisitos para decretar la suspensión del proceso prejudicialidad, esto es, se allegó prueba de la existencia de la causa penal que la determina y el presente se encuentra en estado de dictar sentencia de segunda instancia (artículos 161 y 162 del C.G.P), en nada cambian el panorama los argumentos del recurso tendientes a sostener que la demandante resulta ser una tercera de buena fe exenta de culpa, porque ese es un análisis que claramente debe hacerse cuando se aborde, eventualmente, la apelación propuesta por la sociedad demandada y no estrictamente en punto de la suspensión aquí cuestionada.

Lo anterior, porque si bien el artículo 83 de la Constitución Nacional obviamente presume la buena fe, mientras que el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio regula lo propio cuando de circulación de títulos valores se trata, lo cierto es que *"(D)entro de la normatividad sobre títulos valores contemplada en el Código de Comercio no existe ninguna norma que permita al juez el pago del título cuando existe objeto ilícito del mismo"*, argumento del que se sirvió la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación para concluir que al no decretar la suspensión por prejudicialidad:

"el juez civil desconoció decisiones penales actuando por fuera de lo que le ordena la Constitución. El derecho cambiario no puede hacer

lícito lo que bajo otro ordenamiento es abiertamente ilícito puesto que este tipo de razonamiento llevaría al desquebrajamiento de la estructura interna del derecho.”⁴

En conclusión, no se repondrá la decisión recurrida en tanto que la suspensión de este trámite responde a una interpretación axiológica del artículo 161.1 del C.G.P, *"entendiendo que el texto debe adecuarse a los principios fundamentales del procedimiento, que emanan del derecho fundamental del debido proceso, y, lógicamente adecuarse al principio constitucional del orden justo".⁵*

Por todo lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia y apegándose a la interpretación sistemática de las normas que gobiernan el asunto, la suscrita Magistrada

RESUELVE

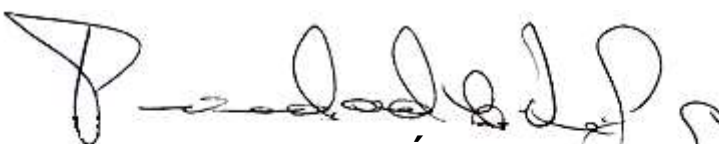
PRIMERO: NO REPONER el auto fechado el 17 de agosto de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR que por Secretaría se entere de lo aquí decidido a los siguientes apoderados interesados:

- **Demandante:** María del Pilar Giraldo León
pilar.giraldo@kennedyslaw.com

- **Demandado:** Andrés Felipe Martínez Arredondo
andres.martinez@aliadosjuridicos.com

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA
MAGISTRADA

⁴ *Ibíd.*

⁵ Tal como lo entendió la Corte Constitucional al aplicar el contenido genuino del artículo 170.1 del derogado Código de Procedimiento Civil, en la sentencia *ibídem*.

Firmado Por:

Piedad Cecilia Velez Gaviria

Magistrada

Sala 002 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**611e0291a8f64045c94b9ae7475092ad37330effde8cb812c48225f
d8f989187**

Documento generado en 05/10/2021 10:13:49 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>